

LA IMPOSIBLE COEXISTENCIA

El título de este artículo se corresponde con el del último informe presentado por la campaña contra los transgénicos de Greenpeace, en esta ocasión junto a las organizaciones Asamblea PAGESA y la Plataforma Transgènics Fora. Se trata de un estudio sin precedentes, en el cual se analiza con todo detalle la grave situación provocada por los cultivos transgénicos en Cataluña y Aragón -principales productoras de transgénicos del Estado- y se describe el inmenso déficit democrático que está generando en España el cultivo de este tipo de maíces.

El informe, primero de estas características en España, recuerda a la opinión pública, a la clase política y a los responsables de las diferentes administraciones las consecuencias reales del cultivo de transgénicos en las principales regiones productoras en España y en la UE. Se describen los graves casos de contaminación genética hallados en el año 2005 (en alguno de ellos la presencia de transgénicos en cosechas ecológicas supera el inaceptable porcentaje de 12%), la opacidad en el mundo de la investigación, el nulo o deficiente seguimiento y control de los cultivos y de los casos de contaminación, los errores administrativos, el cultivo de variedades ilegales, los campos experimentales no autorizados, la ausencia de registros públicos y la contaminación a lo largo de toda la cadena de transporte y comercialización.


Es esta la realidad, frente a la transparencia, el control, la trazabilidad y las ventajas de estos cultivos, según el discurso de muchos responsables políticos y de los dueños de la tecnología. Consecuentemente, la superficie de maíz ecológico, la única opción realmente sostenible para producir maíz, está reduciéndose a una velocidad alarmante, mientras muchos organismos dedican una parte importante de su actividad a experimentar con transgénicos en lugar de fomentar la investigación en agroecología.

Mientras las actuaciones del Gobierno del PP apoyaron a las multinacionales agrobiotecnológicas en contra de los intereses de agricultores y consumidores y en perjuicio del medio ambiente, a partir de marzo de 2004 se estableció un cierto diálogo con la Administración del Gobierno del PSOE. Si bien ha mejorado la postura de España en determinadas votaciones en el ámbito de la UE, el Ejecutivo Socialista sigue permitiendo el cultivo de maíces transgénicos cuya seguridad plantea dudas (concretamente el Mon 810, un maíz sobre el que pesan muy serias sospechas acerca de su seguridad sanitaria y ambiental), ha aprobado 14 nuevas variedades y ha tolerado que se cultiven en 2005 miles de hectáreas de Bt 176, un maíz prohibido a partir del 1 de enero de 2005.

El Ministerio de Agricultura (MAPA) ha presentado varios proyectos de Real Decreto sobre la llamada "coexistencia" entre cultivos transgénicos y no transgénicos claramente diseñados por y para los intereses de la industria agrobiotecnológica y semillera. El amplio movimiento social de rechazo frenó la aprobación de estos textos en al menos tres ocasiones; varios altos cargos de los Ministerios de Medio Ambiente y de Agricultura afirman estar trabajando en un nuevo texto más acorde con las demandas de la amplia coalición de organizaciones críticas.

Mientras, el autor de este artículo sigue preguntándose -por no haber recibido absolutamente ninguna información al respecto- cual es el papel del Ministerio de Medio Ambiente en todo esto y cual es la postura de un ministerio que el pasado verano presentó, junto al MAPA, una nueva versión de borrador de real decreto de coexistencia que más bien parecía escrito por Monsanto o Syngenta, en una UE cada vez más crítica, donde varios países están estableciendo moratorias contra, precisamente, los tipos de maíz cuyo cultivo el Gobierno tolera en España...

POR TODO ELLO GREENPEACE SIGUE EXIGIENDO QUE:

- ◆ Se suspenda inmediatamente toda autorización de cultivo de transgénicos en España.
- ◆ Se suspenda cualquier intento de aprobar normas de "coexistencia" basadas en la contaminación y la ausencia de responsabilidad por parte de los contaminadores y de los dueños de las tecnologías.
- ◆ Las autoridades realicen un replanteamiento de la política agraria española en el sentido de garantizar la posibilidad de que determinadas zonas tengan una producción absolutamente libre de transgénicos.
- ◆ Se cree una comisión que estudie con rigor e independencia y analice de forma transparente los daños ambientales, sociales o sanitarios de los transgénicos, y exija que se apliquen sanciones a sus causantes. Las diferentes Comisiones que existen en España actúan con total falta de transparencia y representan abiertamente los intereses de las multinacionales biotecnológicas. 

El informe completo está disponible en:

www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos/imposible-coexistencia

Juan-Felipe Carrasco
Greenpeace